

nimidad respecto de los demás los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Mayo 17 de 1872.—*Alejo Gomez Eguiarte*, Oficial 2º y archivero.

• ACUERDO de la Suprema Corte de Justicia en la consulta hecha por el Juez de Distrito de Puebla, sobre quién deba conocer de un Juicio en que están impedidos el Juez propietario y los tres suplentes.

El C. Juez de Distrito del Estado de Puebla de Zaragoza, con fecha cuatro del corriente consultó á esta Corte Suprema quién debía conocer de un negocio en que están impedidos el Juez nato y los tres suplentes, á cuya consulta se acordó lo siguiente.

“México, Julio 6 de 1872.—Contéste-se, que no estando por la Constitución limitados los Tribunales Federales á territorio determinado, en cuanto al conocimiento de los negocios, la jurisdicción de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito podría ampliarse á mayor territorio del que tiene señalado actualmente: que si la ley ha señalado un territorio determinado á cada Tribunal de Circuito y á cada Juzgado de Distrito, lo ha hecho con el solo objeto de que la Justicia se administre con mas prontitud y menos molestias de los interesados: que por lo mismo, en el supuesto de que un Tribunal de Circuito ó en un Juzgado de Distrito haya negocios en que el Juez propietario y todos los suplentes estén impedidos de conocer, atendiendo á la naturaleza de la Jurisdicción Federal, el Tribunal de Circuito ó el Juzgado de Distrito mas inmediatos pueden

conocer de dichos negocios: que tratándose en el caso de la consulta del Juez de Distrito de Puebla, de un negocio radicado ya en un Juzgado y el cual por lo mismo deberá sentenciarse por un Tribunal que se halla establecido previamente [artículo 14 de la Constitución Federal,] la falta absoluta de los Jueces no podría subsanarse por medio de una ley que estableciera otros nuevos para que conocieran del mismo negocio; sino que solo puede subsanarse por la aplicación judicial del derecho existente; cuya aplicación corresponde á esta Suprema Corte de Justicia para designar en este caso el Juez competente: que en la administración de justicia del fuero comun, se ha observado la práctica de que, cuando en un territorio judicial estuvieran todos los Jueces impedidos de conocer en algunos negocios, conociera de ellos el Juez del territorio mas inmediato, segun la prevencion del artículo 85 de la ley de 23 de Mayo de 1837; y que por todos estos fundamentos el Juez de Distrito de Puebla debe pasar el conocimiento del negocio á que se refiere en su consulta, al Juez de Distrito cuya residencia esté mas inmediata de los comprendidos en el mismo Circuito. Trascríbase este acuerdo al Tribunal de Circuito de Puebla. Una rúbrica—*Aguilar*.—secretario.

Es copia que certifico para su publicación. México, Julio 13 de 1872.—*Agustin Peralta*.

COMPETENCIA. Promovida por el Juzgado 1º de lo civil de México al Juzgado de lo criminal de Querétaro, para conocer de la demanda entablada por la Sra. Doña Margarita Fernandez de Córdova, albacea de la Sra. Doña Dolores Martinez Munguía, contra el C. Agustin Fernandez de Córdova, sobre rendición de cuentas en la administración del intestado de Doña Dolores Martinez Munguía.

PEDIMENTO FISCAL:

El Fiscal dice: que el Juzgado 1º de lo civil de México, ha iniciado compe-

tencia al 2º de letras de Querétaro para conocer de la demanda que Doña Margarita Fernandez Córdova de Escoto ha promovido contra su padre D. Agustín, sobre rendición de cuentas en la administración del intestado de Doña Dolores Munguía Martínez, madre de la promovente, y esposa del demandado.

El Fiscal se ha hecho cargo de las razones aducidas por ambos jueces en apoyo de su respectiva jurisdicción y no puede menos de adoptar las alegadas por el Juez de México.

Con efecto, además de los fundamentos expresados en el informe de este Juez que obra á fojas 7 del Toca respectivo, y que el suscrito reproduce en todas sus partes, hay también la circunstancia atendible de que ese cuasi contrato de que nos habla el Juez de Querétaro en su informe y de donde parte para apoyar su jurisdicción, porque de él deriva el fuero que se surte por la administración de bienes y rendición de cuentas; no existe en realidad. El C. Fernandez de Córdova, marido y conjunta persona que fué de Doña Dolores Martínez Munguía, no puede decirse que en la actualidad ni por la muerte de su mujer está administrando bienes ajenos. En el matrimonio, todos los bienes son comunes para ambos cónyuges: los dos tienen derecho á ellos en virtud de ser socios de una compañía muy privilegiada, y por lo mismo, mientras no se dividan: entre tanto no se expliquen por decirlo así y se adjudiquen á cada cónyuge con exclusiva propiedad respectivamente hablando, no puede decirse que D. Agustín Córdova administra bienes ajenos. La misma Sra. Córdova, viene confesando en uno de sus escritos, que desde el fallecimiento de la interesada, hasta hoy, el padre de la promovente no ha procedido á la división de la herencia; ni les ha dicho á los hijos del primer matrimonio, y al cual pertenece la referida Sra. Córdova, cuáles

sean los bienes de que se compone la herencia que hoy demanda; ni en qué consistan. Cuando las leyes previenen que el Juez del lugar del domicilio del testador sea el competente para conocer del juicio de inventarios á sus bienes; parten del principio de que esos bienes sean conocidos y determinados. Pero hasta ahora, respecto de los hijos de la Sra. Martínez Munguía, solo puede reconocérseles un derecho; el de sucesión á la herencia como descendientes legítimos en primer grado, y por lo mismo llamados directamente por la ley; este derecho les dá el carácter de actores de un juicio en que su padre el Sr. Fernandez hace de reo ó demandado: y en cuyo juicio van á exigir de este que les devuelva lo que les pertenece, y entonces es de aplicarse la regla general de derecho, que previene, que el actor siga el fuero del reo, y todas las demás leyes y doctrinas que defienden que el fuero del domicilio es el mas privilegiado y atendible; y aparezca solo ó en concurrencia con otros. Bajo este punto de vista, el Juez de México ha defendido su jurisdicción: y el Fiscal, como espuso al principio, está absolutamente conforme.

Por tanto, concluye sujetando á la deliberación de la Sala las siguientes proposiciones.

Primera: se declara que el Juez 1º de lo civil de México, es el competente para conocer de la demanda promovida por Doña Margarita Fernandez Córdova de Escoto, y sus incidentes.

Segunda: devuélvanse sus actuaciones al Juez de México, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al 2º de letras de Querétaro para su conocimiento, hágase saber y archívese á su vez el Toca.

México, Abril 17 de 1872.—*Altamirano.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 11 de 1872.—Vista la competencia promovida por el Juzgado 1º del ramo de lo civil de esta ciudad al Juzgado de lo criminal de Querétaro, para conocer de la demanda entablada por la Sra. Doña Margarita Fernandez de Córdoba, albacea de la Sra. Doña Dolores Martinez Munguía contra el padre de la primera, C. Agustin Fernandez de Córdoba, esposo que fué de la segunda, sobre que entregue los bienes que ésta llevó al matrimonio y la parte de gananciales adquiridos durante el que pertenezca á los hijos de ese matrimonio: visto lo expuesto por las partes y por los Jueces en apoyo de la respectiva jurisdiccion: lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Fiscal y todo lo demás que convino. Considerando: que no hay en autos ninguna justificacion de que D. Agustin Fernandez de Córdoba haya administrado bienes que fueron de la Sra. Munguía en vida de esta, ni despues de que falleció; que no estando justificado que el C. Agustin Fernandez de Córdoba haya administrado bienes pertenecientes á la testamentaria de la Sra. Doña Dolores Martinez, no puede reclamarle rendicion de cuentas: que suponiéndosele deudor de la testamentaria, la demanda que contra él se dirija, debe ponerse ante el Juez de su domicilio; y que en autos consta, que está domiciliado en México desde el año de 1867: de conformidad con lo pedido por el C. Fiscal y con fundamento de lo dispuesto por la ley 32 tít. 2º part. 3ª versículo "E porende." Se declara: Primero; que el Juez 1º del ramo de lo civil de esta Ciudad es el competente para conocer de la demanda entablada por la Sra. Doña Margarita Fernandez de Córdoba contra el C. Agustin Fernandez de Córdoba.

Segundo: no hay condenacion de costas. Tercero: remítanse las actuaciones

al Juzgado 1º del ramo de lo civil de esta Ciudad con copia certificada de esta sentencia remitiéndose copia igual al Juzgado de lo criminal de Querétaro para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de esta Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.

S. Lerdo de Tejada.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. Lafragua.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias.—México, Mayo 20 de 1872.—*Alejo Gomez Eguarte,* oficial 2º y archivero.

AMPARO de garantías promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por los CC. José Rosales Gordon, Guadalupe López Cano y otros, contra un acuerdo del Ayuntamiento de esta ciudad que les impide comerciar como baratilleros ambulantes en la plazuela llamada del Jardín.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que los comerciantes del Baratillo, situado en la plazuela del Jardín de esta ciudad, han interpuesto el recurso de amparo y pedido la suspensión de los efectos de la determinacion por la cual el Ayuntamiento ha dispuesto que el comercio de los efectos que se expenden en la plazuela mencionada se verifique en el Mercado de Guerrero, con cuya determinacion consideran violadas en su persona, los CC. que firman el ocurso, las garantías consignadas en los artículos 1º, 4º, 9º, 15º y 28º de la Constitucion. La autoridad responsable ha rendido el informe que previene la ley orgánica reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, y del informe resulta con evidencia, que el Ayuntamiento ha obrado conforme á sus facultades sin vulnerar los precep-